



Alejandro Márquez

ABOGADO

**DOCTORA**  
**CLAUDIA PATRICIA NAVARRETE PALOMARES**  
**JUZGADO TREINTA CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.**  
[ccto30bt@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:ccto30bt@cendoj.ramajudicial.gov.co)  
**Bogotá D.C.**

**Ref.: ACCIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR FINANCIERO**

**DEMANDANTE: CENTROS DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ DE COLOMBIA S.A.S.**

**DEMANDADO: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**

**RADICADO: 2024060107-019-000**

**EXPEDIENTE: 11001-080-000-82-2024-08406-01**

**ASUNTO: SUTENTACIÓN RECURSO DE APELACIÓN**

**JOSÉ ALEJANDRO MÁRQUEZ CEBALLOS** mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.789.960 domiciliado en la ciudad de Bogotá D.C., con Tarjeta Profesional de Abogado No. 150.054 de C. S. de la J. actuando en nombre y representación de **CENTROS DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ DE COLOMBIA S.A.S.** de conformidad con el poder que ya reposa en el expediente, por medio del presente escrito presento **RECURSO DE APELACIÓN**, así:

## **I. DEL FALLO PROFERIDO**

Señala la sentencia dos puntos por los cuales, sin un mayor análisis, decide negar las suplicas de la Demanda, con los siguientes argumentos:

### **"2.1. NO EXISTE UNA RELACIÓN DE CONSUMO.**

...

*En ese orden, las relaciones de consumo se caracterizan por tener un sujeto con una calidad especial, esto es, el consumidor, y se considera como tal a quien en las relaciones jurídico- económicas es el **destinatario final** de un bien o servicio*



Alejandro Márquez

ABOGADO

*que tenga la finalidad satisfacer necesidades propias, familiares y empresariales siempre que no se encuentren directamente relacionadas a una actividad económica o a su objeto social.*

...

*En esa medida, es evidente que los contratos de seguro fueron celebrados por .... tuvieron como finalidad el cumplimiento de una obligación legal, necesaria para poder ejercer la actividad económica y objeto social de la sociedad demandante, y no para satisfacer necesidades propias, privadas, familiares, o domésticas, por lo que la sociedad demandante no tiene la calidad de consumidor final del producto.*

*Por lo expuesto, resulta claro para el Despacho que en el presente asunto no existe una relación de consumo, pues el accionante no tiene la calidad de consumidor final de las pólizas y por lo tanto no se encuentra habilitado para ejercer la acción de protección al consumidor.*

## **2.2. FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA.**

...

*Expuesto lo anterior, el despacho declarará probada de oficio la excepción de "FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA" desestimando así las pretensiones de la demanda, absteniéndose de analizar los demás medios exceptivos formulados de conformidad con lo establecido en el inciso tercero del artículo 282 del Código General del Proceso."*

## **II. DE LAS FALENCIAS DEL FALLO PROFERIDO**

El fallo, decide declarar la "FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA", sin un mayor análisis, trayendo como argumento que *"es evidente que los contratos de seguro fueron celebrados .... tuvieron como finalidad el cumplimiento de una obligación legal, necesaria para poder ejercer la actividad económica y objeto social de la sociedad demandante."*



# Alejandro Márquez

ABOGADO

Para el Despacho, no existe consumidor final, no hay relación de consumo, porque erradamente, y sin revisar las pruebas, declara que estaba dentro del objeto social del CDA la expedición de las pólizas adquiridas a la Demandada, y que adicional dicha adquisición era obligatoria, frente a esto debemos señalar que:

- Que el artículo 6 de la Ley 2283 de 2023, establecía que los CDA debían adquirir una póliza como tomadores del seguro, para entregar a sus clientes de forma gratuita.
- Que dicho artículo fue demandando por inconstitucional ante la Corte Constitucional.
- Que dicha entidad profirió la Sentencia **C-470 DE 2023**, que declaró la inexequibilidad del artículo 6 de la Ley 2283 de 2023, con los siguientes argumentos: (Anexo No. 1)

## **"El seguro de daños**

**116.** Según el artículo 1083 del Código de Comercio, tiene interés asegurable a quien su patrimonio pueda resultar afectado directa o indirectamente, por la realización de un riesgo. De manera que, es asegurable todo interés que, además de lícito, sea susceptible de estimación en dinero. En este orden de ideas, el artículo 1110 del mencionado Código prevé que en materia de seguros de daños la indemnización será pagadera en dinero, o mediante reposición, reparación o reconstrucción de la cosa asegurada, a opción del asegurador.

**117.** Sobre el seguro de daños, la Corte Suprema de Justicia ha precisado que en este "rige con vigor el principio indemnizatorio. Sin embargo, la relación jurídico patrimonial que puede verse menoscaba no se supedita a la propiedad de un objeto, dado que puede referirse a vínculos de diversa naturaleza (...) puede hallarse radicada en **bienes corporales e incorporales**, presentes y futuros, determinados o indeterminados y aun



Alejandro Márquez

ABOGADO

*en inmateriales como la esperanza cierta o siquiera probable, pero fundada, de una garantía.”<sup>74</sup> (Negrilla fuera del texto)*

**118. El seguro de daños, contrario al SOAT, es un contrato voluntario, no es obligatorio y su contratación depende de la autonomía de la voluntad de las partes...”** (Resaltas y negrillas mías)

Por lo anterior, no es dable señalar que las pólizas eran obligatorias, lo que si es cierto, es que se suscribieron en ejercicio de la autonomía de la voluntad.

Adicional a lo anterior, también al Corte Constitucional dejó claro, que la póliza no hacía parte del desarrollo del objeto social, ni de la actividad económica, del CDA, con lo que se cumpliría lo expresado por este mismo Despacho, cuando se dice que:

*“...las relaciones de consumo se caracterizan por tener un sujeto con una calidad especial, esto es, el consumidor, y se considera como tal a quien en las relaciones jurídico- económicas es el **destinatario final** de un bien o servicio que tenga la finalidad satisfacer necesidades propias, familiares y empresariales **siempre que no se encuentren directamente relacionadas a una actividad económica o a su objeto social.**”*

Ordena la Sentencia **C-470 DE 2023**, lo siguiente:

***“137. Al respecto, la Corte constata que el artículo 6 acusado fue adoptado en una disposición con rango legal, esto es, la Ley 2283 de 2023. No obstante, la norma tiene el potencial de afectar el núcleo esencial del derecho a la libertad de empresa en el marco de la libertad económica e iniciativa privada<sup>96</sup> por cuanto interfiere desproporcionadamente en los asuntos internos y en el desarrollo económico que los CDA desarrollan al obligarlos a tomar y pagar un seguro para amparar cualquier riesgo de responsabilidad extracontractual ajeno a su actividad o al servicio prestado, sin que les sea posible recuperar dicha erogación, pues la misma norma lo impide.***

...



# Alejandro Márquez

ABOGADO

**145.** *No obstante, el medio empleado, así sea adecuado para alcanzar una finalidad legítima es incompatible con la Constitución porque vulnera el núcleo esencial del derecho a la libertad de empresa. Esta Sala advierte que la medida es contraria a la Constitución, porque le impone una carga demasiado onerosa a un particular –en este caso los CDA– y con ello afecta el núcleo esencial del derecho a la libertad de empresa al interferir en los asuntos internos de la empresa y obligarlo a pagar con sus propios recursos un seguro que no es inherente a su actividad, ni deriva de un desarrollo de la solidaridad con lo que, a su vez, restringe su derecho a recibir un beneficio económico razonable.” (Resalta y subrayas más)*

Es más que claro, que incluso cuando estuvo vigente el inexecutable artículo 6 de la Ley 2283 de 2023, la póliza no hacía parte del objeto social, ni de la actividad del CDA, por lo anterior se cumple que la actividad no se encuentre directamente relacionadas a una actividad económica o el objeto social del CDA, **como claramente lo dejó establecido la Corte Constitucional.**

La Corte Constitucional, ahora en la Sentencia C 909 de 2012, también hizo la precisión sobre a quien se debe considerar Consumidor Financiero, así:

*"También ha de precisar esta Corte que la expresión "todo" converge en quien entrañe una relación de consumo ante las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, de manera que, como consumidor financiero, (i) refiere a un determinado sector de la economía, (ii) frente a la adquisición de un bien o servicio, para satisfacer una necesidad propia, no ligada intrínsecamente a su actividad económica, componentes que coetáneamente permiten establecer que, (iii) aunque no sea habitual consumidor financiero, ello no enerva ni impide que llegue a serlo, manteniéndose como potencial consumidor, que se materializará al mostrar interés por un bien o servicio, y (iv) lo será todo aquel vinculado de una u otra forma, directa o indirectamente, con las entidades vigiladas por razón del producto o servicio ofrecido y adquirido o por adquirir, propio de tal actividad económica."*

Circunstancias que convergen en el acá Demandante, así:



# Alejandro Márquez

ABOGADO

- i) *"refiere a un determinado sector de la economía"* : Para este caso, hace referencia al sector de los Centros de Diagnostico Automotor.
- ii) *"frente a la adquisición de un bien o servicio, para satisfacer una necesidad propia, no ligada intrínsecamente a su actividad económica."*: Tal como se explicó líneas arriba, la adquisición de la póliza no hacía parte de la actividad económica, o el objeto social del CDA, y mucho menos era de carácter obligatorio.
- iii) *"lo será todo aquel vinculado de una u otra forma, directa o indirectamente, con las entidades vigiladas por razón del producto o servicio ofrecido y adquirido o por adquirir, propio de tal actividad económica."* Para el presente caso, mi cliente se encontraba vinculado, al ser tomador de la póliza, con el acá Demandando.

A tal punto es lo anterior, que en reciente fallo dentro de una Acción de Tutela, sobre hechos idénticos a los de esta demanda, la Corte Suprema de Justicia, ha expresado: (Anexo No. 1)

*"De ese modo, no se observa que la Superintendencia Financiera, en el fallo censurado en sede de tutela, hubiera analizado las normas y jurisprudencia citadas, para concluir que la aquí accionante no cuenta con la calidad de consumidora financiera."*

*Nótese que la mencionada entidad nada dijo sobre el régimen especial contenido en la Ley 1328 de 2009, que define privativamente, en el literal d) de su artículo 2º, como consumidor financiero a «todo cliente, usuario o cliente potencial de las entidades vigiladas»; concepto que demarcó el legislador previamente a la promulgación del régimen amplio establecido en la Ley 1480 de 2011, aplicable, según su artículo 2º.."*

Esto luego de hacer un análisis sobre quien es un consumidor financiero, así:

*"En efecto, la autoridad accionada, al emitir sentencia anticipada dentro del expediente 2024-7085, omitió pronunciarse sobre el siguiente marco jurídico:*



Alejandro Márquez

ABOGADO

*El artículo 1º de la Ley 1328 de 2009 establece:*

*«Objeto y ámbito de aplicación. **El presente régimen** tiene por objeto establecer los principios y reglas que rigen la protección de los consumidores financieros en las relaciones entre estos y las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, sin perjuicio de otras disposiciones que contemplen medidas e instrumentos especiales de protección». (Negrillas fuera de texto).*

*Dicho texto legal, en el literal d) de su artículo 2º, definió como consumidor financiero a **«todo cliente, usuario o cliente potencial de las entidades vigiladas»**. (Negrillas subrayadas fuera de texto). Norma declarada ajustada a la Carta Política, mediante sentencia C-909/12, al concluirse: «por no vulnerar la Constitución, será declarado exequible el segmento acusado "Es todo cliente, usuario o cliente potencial de las entidades vigiladas", del literal d) del artículo 2º de la Ley 1328 de 2009, decisión que de suyo **enerva y desvanece cualquier análisis acerca del condicionamiento del aparte acusado.**» (Negrillas fuera de texto).*

*Disposición que guarda correspondencia con los literales a), b) y c), ibidem, que, respectivamente, definieron:*

*«a) Cliente: Es la persona natural o jurídica con quien las entidades vigiladas establecen relaciones de origen legal o contractual, para el suministro de productos o servicios, en desarrollo de su objeto social.*

*b) Usuario: Es la persona natural o jurídica quien, sin ser cliente, utiliza los servicios de una entidad vigilada. c) Cliente Potencial: Es la persona natural o jurídica que se encuentra en la fase previa de tratativas preliminares con la entidad vigilada, respecto de los productos o servicios ofrecidos por esta».*

De donde se concluye que mi cliente **CENTROS DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ DE COLOMBIA S.A.S.**, no solo es un consmidor financiero, sino que tiene una relación de consumo con la Demandada **MUNDIAL DE SEGUROS**.



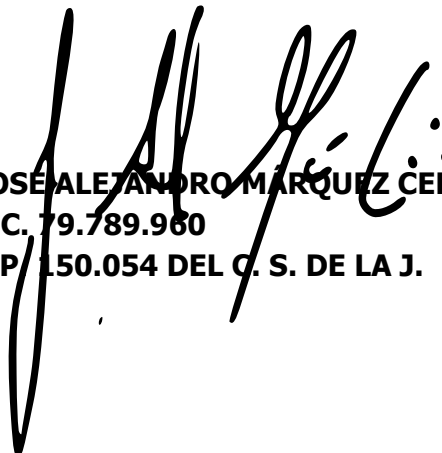
Alejandro Márquez

ABOGADO

Por lo anteriormente expuesto se solicita:

- A. REVOCAR EN SU INTEGRIDAD LA SENTENCIA PROFERIDA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA EN EJERCICIO DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR.**
- B. SE PROFIERA DECISIÓN, ACCEDIENDO A LA TOTALIDAD DE LAS PRETENSIONES.**
- C. SE ORDENE LA INVESTIGACIÓN A LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS, AL REALIZAR PRACTICAS ABUSIVAS EN EL MERCADO.**

Con sentimiento de acatamiento y respeto



**JOSE ALEJANDRO MÁRQUEZ CEBALLOS**  
**C.C. 79.789.960**  
**T.P/ 150.054 DEL C. S. DE LA J.**





República de Colombia  
**Corte Suprema de Justicia**  
Sala de Casación Civil, Agraria y Rural

## **MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ**

Magistrada ponente

**STC8865-2025**

**Radicación No. 11001-22-03-000-2025-00441-01**

(Aprobado en sesión de once de junio de dos mil veinticinco)

Bogotá, D.C., once (11) de junio de dos mil veinticinco (2025).

Decide la Corte la impugnación de la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá el 5 de marzo de 2025, en la acción de tutela que promovió la sociedad CDA Motoline S.A.S., contra la Superintendencia Financiera de Colombia –Delegatura para Funciones Jurisdiccionales-, trámite al que fue vinculada la Compañía Mundial de Seguros SA y citados los intervinientes en la acción de protección al consumidor financiero n° 2024-7085

### **ANTECEDENTES**

1. La sociedad solicitante invocó la protección del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad accionada.

Manifestó que, dando cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 6 de la Ley 2283 de 2023, adquirió de Mundial de

Seguros SA varias pólizas de responsabilidad civil para vehículos de servicio particular, que ampararan los daños materiales causados a terceros, por la vigencia de cada una de las revisiones tecnicomecánicas que realizara.

Refirió que la sentencia C-470/2023 declaró la inconstitucionalidad de la disposición anteriormente referida, razón por la cual revocó unilateralmente, en los términos del artículo 1071 del Código de Comercio, las pólizas adquiridas, decisión que no fue aceptada por la aseguradora, y se negó a hacer la devolución de las primas no devengadas.

Indicó que, con motivo de la negativa de Mundial de Seguros S.A., formuló acción de protección al consumidor financiero ante la Superintendencia Financiera de Colombia, autoridad jurisdiccional que profirió sentencia anticipada en la que declaró próspera la excepción de falta de legitimación en la causa por activa, al considerar que no existió una relación de consumo, en tanto que la adquisición de las pólizas se hizo en ejercicio de una actividad económica intrínseca a su objeto social.

2. Con fundamento en lo anterior, solicitó **«DEJAR SIN VALIDEZ NI EFECTO LA SENTENCIA PROFERIDA EL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2025 POR LA ACÁ ACCIONADA, DENTRO DEL RADICADO 2024050306-015-000, EXPEDIENTE 2024-7085»** y, en consecuencia, se ordene a la autoridad accionada que **«EN UN TÉRMINO DE 48 HORAS PROFIERA DECISIÓN DONDE DECIDA LA ACTUACIÓN»**. (Mayúsculas sostenidas y negrillas propias del texto original).

## **LA RESPUESTA DE LA ACCIONADA**

La Superintendencia Financiera de Colombia - Delegatura para Funciones Jurisdiccionales- solicitó declarar improcedente el amparo, comoquiera que *«no se presentó en ninguna etapa de es[a] actuación, vulneración alguna a los derechos fundamentales del accionante»*.

Destacó que la adquisición de las pólizas de seguro por parte de la sociedad actora se originó en la necesidad de dar cumplimiento a la exigencia establecida en la Ley 2283 de 2023, para ejercer la actividad como Centro de Diagnóstico Automotor y, como ese negocio jurídico no se celebró con el propósito de satisfacer necesidades propias, privadas, familiares o domésticas, la sociedad actora no adquirió, en consecuencia, la calidad de consumidor final del producto.

Agregó que, en ese sentido, no se configuró una relación de consumo y, por esa razón, CDA Motoline S.A.S. no estaba legitimada para ejercer una acción de protección al consumidor, lo que llevó a declarar próspera la excepción de falta de legitimación en la causa por activa, propuesta por la compañía aseguradora.

## **LA SENTENCIA IMPUGNADA**

El Tribunal Superior de Bogotá negó el amparo porque no evidenció defecto sustancial alguno *«que amerite la intervención del juez constitucional»*, toda vez que *«la decisión cuestionada estuvo debidamente motivada bajo aspectos legales y jurisprudenciales, en donde se explica en forma detallada a qué grupo*

*de consumidores se hace extensiva una acción de protección al consumidor, la calidad especial que debe tener el consumidor para que éste, en la relación jurídico económica, pueda ser considerado como destinatario final del bien o servicio que tenga la finalidad de satisfacer necesidades propias, familiares y empresariales siempre que no se encuentren directamente relacionadas a una actividad económica o a su objeto social, condición que al parecer de la entidad accionada el CDA Motoline S.A.S., no cumple».*

## **LA IMPUGNACIÓN**

La formuló quien dijo actuar como apoderado judicial de la sociedad accionante, quien transcribió literalmente el mismo escrito de tutela, al que agregó que tanto la Superintendencia Financiera de Colombia como el Tribunal Superior de Bogotá desconocieron el pronunciamiento efectuado por la Corte Constitucional, en el que declaró la inexequibilidad de la norma que hizo obligatoria la adquisición de pólizas de responsabilidad civil extracontractual a los Centros de Diagnóstico Automotor.

Adicionalmente, indicó que, con la posición adoptada por ambas autoridades, se está afectando a un número elevado de consumidores financieros, que *«tienen embolados alrededor de 20.000 MILLONES DE PESOS, que están engrosando las arcas de la compañía MUNDIAL DE SEGUROS S.A.»*.

### **Actuación previa.**

De la revisión preliminar del expediente, realizada por esta Corporación, se evidenció que el poder conferido por la sociedad actora y aportado con el escrito inicial de tutela, no

satisfacía los requisitos establecidos en la jurisprudencia de esta Sala Especializada.

En ese sentido y, con el propósito de garantizar el derecho fundamental al debido proceso de ambas partes, mediante auto de 18 de marzo de 2025, notificado el día siguiente, se requirió a la sociedad CDA Motoline S.A.S. para que aportara, en el término de un (1) día, el correspondiente poder, con el cumplimiento de los requisitos señalados en la sentencia de unificación CSJ STC10721 de 2023.

Mediante memorial remitido por vía electrónica a la Secretaría de esta Sala, el 20 de marzo de 2025 se allegó el correspondiente poder, dando cumplimiento a las exigencias efectuadas. Por lo tanto, se procederá a decidir la impugnación formulada contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, el 5 de marzo pasado.

## **CONSIDERACIONES**

### **1. Procedencia de la acción de tutela frente a providencias y actuaciones judiciales.**

En principio, la acción de tutela resulta improcedente para cuestionar providencias o actuaciones jurisdiccionales, en consideración a la independencia y autonomía que los artículos 228 y 230 de la Constitución Política otorgan a la Administración de Justicia para adoptar sus decisiones judiciales. No obstante, si el sentenciador incurre en un proceder manifiestamente contrario al ordenamiento

jurídico, los interesados, no contando con otro medio de defensa y acudiendo a esta acción oportunamente, el juez del amparo está llamado a intervenir, para enmendar o prevenir la violación de los derechos fundamentales involucrados.

## **2. La queja constitucional.**

En el asunto que ocupa la atención de la Sala, la sociedad CDA Motoline S.A.S. cuestiona la sentencia anticipada proferida el 13 de febrero de 2025, por la Superintendencia Financiera de Colombia – Delegatura para Funciones Jurisdiccionales-, en la acción de protección al consumidor financiero que instauró; providencia mediante la cual se declaró próspera la excepción de falta de legitimación en la causa por activa, propuesta por la sociedad Compañía Mundial de Seguros SA, al concluir que la adquisición de las pólizas, realizada por la accionante, no constituyó, en realidad, una relación de consumo.

## **3. De la vulneración evidenciada.**

**3.1.** En el caso bajo estudio se configuró una vía de hecho, que impone la intervención de esta Sala como juez constitucional, situación que conlleva revocar el fallo impugnado y la concesión del amparo, debido a la *falta de motivación* por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia – Delegatura para Funciones Jurisdiccionales-, para «DECLARAR de oficio la excepción de *“FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA”*», respecto de la sociedad CDA Motoline S.A.S., por considerar que «no existe una relación de

*consumo, pues el accionante no tiene la calidad de consumidor final de las pólizas y por lo tanto no se encuentra habilitado para ejercer la acción de protección al consumidor».*

En efecto, la autoridad accionada, al emitir sentencia anticipada dentro del expediente 2024-7085, omitió pronunciarse sobre el siguiente marco jurídico:

El artículo 1° de la Ley 1328 de 2009 establece:

*«Objeto y ámbito de aplicación. **El presente régimen** tiene por objeto establecer los principios y reglas que rigen la protección de los consumidores financieros en las relaciones entre estos y las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, sin perjuicio de otras disposiciones que contemplen medidas e instrumentos especiales de protección».* (Negrillas fuera de texto).

Dicho texto legal, en el literal d) de su artículo 2°, definió como consumidor financiero a **«todo cliente, usuario o cliente potencial de las entidades vigiladas»**. (Negrillas subrayadas fuera de texto). Norma declarada ajustada a la Carta Política, mediante sentencia C-909/12, al concluirse: *«por no vulnerar la Constitución, será declarado exequible el segmento acusado “Es todo cliente, usuario o cliente potencial de las entidades vigiladas”, del literal d) del artículo 2° de la Ley 1328 de 2009, decisión que de suyo **enerva y desvanece cualquier análisis acerca del condicionamiento del aparte acusado**»*. (Negrillas fuera de texto).

Disposición que guarda correspondencia con los literales a), b) y c), *ibidem*, que, respectivamente, definieron:

*«a) **Cliente:** Es la persona natural o jurídica con quien las entidades vigiladas establecen relaciones de origen legal o contractual, para el suministro de productos o servicios, en desarrollo de su objeto social.*

b) **Usuario:** Es la persona natural o jurídica quien, sin ser cliente, utiliza los servicios de una entidad vigilada.

c) **Cliente Potencial:** Es la persona natural o jurídica que se encuentra en la fase previa de tratativas preliminares con la entidad vigilada, respecto de los productos o servicios ofrecidos por esta».

Por su parte, el artículo 2º de la Ley 1480 de 2011 determina:

**Objeto.** Las normas de esta ley regulan los derechos y las obligaciones surgidas entre los productores, proveedores y consumidores y la responsabilidad de los productores y proveedores tanto sustancial como procesalmente.

Las normas contenidas en esta ley son aplicables en general a las relaciones de consumo y a la responsabilidad de los productores y proveedores frente al consumidor en todos los sectores de la economía **respecto de los cuales no exista regulación especial, evento en el cual aplicará la regulación especial y suplementariamente las normas establecidas en esta Ley.**

Esta ley es aplicable a los productos nacionales e importados. (Negrillas subrayadas fuera de texto).

Contenido normativo acerca del cuál la Corte Constitucional, en Sentencia C-278/24, recientemente recordó:

**La protección del consumidor se manifiesta en diferentes tipos de relaciones.** La **Ley 1480 de 2011** establece un régimen general de protección al consumidor definiendo como tal a “[t]oda persona natural o jurídica que, como destinatario final, adquiera, disfrute o utilice un determinado producto, cualquiera que sea su naturaleza para la satisfacción de una necesidad propia, privada, familiar o doméstica y empresarial cuando no esté ligada intrínsecamente a su actividad económica” (art. 5.3)[7]. A su vez, la **Ley 1328 de 2009** define al consumidor financiero como “todo cliente, usuario o cliente potencial de las entidades vigiladas” (art. 5.d). (Negrillas fuera de texto).

Además, en esa providencia, dicha Corporación precisó:

El segundo inciso del artículo 2º de la Ley 1480 establece: “Las normas contenidas en esta ley son aplicables en general a



**las relaciones de consumo y a la responsabilidad de los productores y proveedores frente al consumidor en todos los sectores de la economía respecto de los cuales no exista regulación especial, evento en el cual aplicará la regulación especial y suplementariamente las normas establecidas en esta Ley**". (Nota al pie 7). (Subrayado y negrillas fuera de texto).

**3.2.** De ese modo, no se observa que la Superintendencia Financiera, en el fallo censurado en sede de tutela, hubiera analizado las normas y jurisprudencia citadas, para concluir que la aquí accionante no cuenta con la calidad de consumidora financiera.

Nótese que la mencionada entidad nada dijo sobre el régimen especial contenido en la Ley 1328 de 2009, que define privativamente, en el literal d) de su artículo 2º, como consumidor financiero a «*todo cliente, usuario o cliente potencial de las entidades vigiladas*»; concepto que demarcó el legislador previamente a la promulgación del régimen amplio establecido en la Ley 1480 de 2011, aplicable, según su artículo 2º, «*en general a las relaciones de consumo y a la responsabilidad de los productores y proveedores frente al consumidor en todos los sectores de la economía respecto de los cuales no exista regulación especial, evento en el cual aplicará la regulación especial y suplementariamente las normas establecidas en esta Ley*».

Menos se pronunció la autoridad accionada sobre la distribución de competencias de que trata el artículo 57 de Ley 1480 de 2011, que asignó específicamente el conocimiento de los asuntos relacionados con el consumidor financiero a la Superintendencia Financiera; mientras que el artículo 58, *ibidem*, atribuyó, de manera genérica, competencia a la Superintendencia de Industria y Comercio,

en materia de protección al consumidor; disposiciones reproducidas en el artículo 24 del Código General del Proceso, cuyo análisis se imponía para delimitar los dos regímenes jurídicos y evidenciar la complementariedad supletiva de uno respecto del otro.

Omisión que deja al descubierto la *falta de motivación* de la providencia cuestionada, evento que habilita el resguardo superior para cesar o prevenir la afectación que puedan causar las decisiones jurisdiccionales a los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, cuando se desconozca el deber judicial consagrado en el numeral 7° del artículo 42 del Código General del Proceso; temática sobre el que esta Sala, en sentencia STC5438-2025, sostuvo:

*Debe tenerse presente que la falta de motivación implica el incumplimiento del deber de los funcionarios judiciales de explicar los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones, exigencia ineludible porque, precisamente, en la misma reposa la legitimidad de su órbita funcional, tal como lo ha considerado la jurisprudencia constitucional (C. C., SU-020 de 2020 y, CSJ STC10178-2020 y STC16122-2021, entre otras).*

*Se advierte que el deber de motivar una providencia reclama que la jurisdicción haga públicas las razones que ha tenido en cuenta al adoptar la respectiva resolución judicial, de tal manera que se conozca su contenido para que no aparezca arbitraria, caprichosa, antojadiza, sino producto del análisis objetivo, además de reflexivo de los diferentes elementos de juicio incorporados al expediente y en el marco trazado por el objeto y la causa del proceso (CSJ. STC10178-2020 y STC16122-2021, entre otras).*

#### **4. Conclusión.**

De conformidad con el orden argumentativo previamente presentado, se revocará el fallo impugnado, para

amparar el derecho fundamental al debido proceso de la sociedad CDA Motoline S.A.S. y dejar sin valor ni efecto la sentencia anticipada proferida el 13 de febrero de 2025, por la Superintendencia Financiera de Colombia – Delegatura para Funciones Jurisdiccionales-, así como las demás decisiones que de esa determinación se hayan desprendido, dentro del radicado 2024050306-015-000, expediente 2024-7085 y, en su lugar, se ordenará a la autoridad tutelada que, en el término de diez días, contados a partir de la notificación de esta providencia, resuelva como en derecho corresponda, atendiendo los razonamientos consignados en el presente fallo.

Sin que lo anterior implique definir el asunto en uno u otro sentido pues su resolución estará supeditada al análisis exhaustivo del caso concreto.

### **DECISIÓN**

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

### **RESUELVE**

**PRIMERO: REVOCAR** el fallo impugnado.

**SEGUNDO: CONCEDER** el amparo al debido proceso de la sociedad accionante.

**TERCERO: DEJAR SIN VALOR NI EFECTO** la sentencia anticipada proferida el 13 de febrero de 2025, por la Superintendencia Financiera de Colombia – Delegatura para Funciones Jurisdiccionales-, así como las demás decisiones que de ese fallo se hayan desprendido, dentro del radicado 2024050306-015-000, expediente 2024-7085.

**CUARTO: ORDENAR** a la precitada entidad con funciones jurisdiccionales que, en el término de diez (10) días, contados a partir de la notificación de esta sentencia, proceda a emitir la decisión que en derecho corresponda, atendiendo la argumentación consignada en la parte motiva de esta providencia.

**QUINTO: COMUNICAR** lo aquí resuelto a los interesados, por el medio más expedito, y remítase, en oportunidad, el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

**HILDA GONZÁLEZ NEIRA**  
Presidenta de Sala

**MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ**

**FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA**

**OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE**

**FRANCISCO TERNERA BARRIOS**

**Firmado electrónicamente por:**

**Hilda González Neira**  
**Presidenta de la Sala**

**Martha Patricia Guzmán Álvarez**  
**Magistrada**

**Fernando Augusto Jiménez Valderrama**  
**Magistrado**

**Octavio Augusto Tejeiro Duque**  
**Magistrado**

**Francisco Ternera Barrios**  
**Magistrado**

**Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999**

**Código de verificación: E7D5FBF8CEDCF9673FC571B75BEA7727C12AC8D4892D48BEF22A8B7D188DF06C**

**Documento generado en 2025-06-17**